

Capítulo 1

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

La dictadura de Miguel Primo de Rivera no puede entenderse sin tener en cuenta la crisis del sistema liberal de la Restauración, de la que sería una última consecuencia, ni el contexto internacional que le precedió. El mundo que surgió tras el final de la Primera Guerra Mundial fue muy distinto del anterior. Habían caído cuatro grandes imperios: el otomano, el ruso, el austrohúngaro y el alemán; se había producido un hecho que cambiaría el mundo: la revolución rusa de 1917, y había entrado en escena una nueva potencia: los Estados Unidos de América que, abandonando su tradicional neutralidad, declararon la guerra a Alemania y contribuyeron decisivamente a la victoria aliada.

1. LOS ORÍGENES

La caída de los zares y el triunfo de la revolución fue, sin duda, una gran llamada de atención. Por primera vez se constituía un estado proletario cuyo ejemplo conmocionaría las estructuras sociales, las relaciones económicas y el reparto del poder político. La sociedad de posguerra, después de que las mujeres hubieran ocupado durante la guerra puestos de trabajo hasta entonces desempeñados por los hombres, traería también una revolución en los usos y en las costumbres. Las mujeres rusas obtuvieron el derecho a votar en 1917 y las norteamericanas en 1920. Los felices 20 presenciaron un efímero ciclo alcista en la economía europea y americana que, unido a la recuperación de la vida social y al optimismo del fin de la guerra propiciaron una década de euforia e importantes novedades impensables antes de la guerra. Fue la década del charleston, de los grandes rascacielos, del jazz, de las primeras películas sonoras y en color, antes de que la crisis se lo llevara todo por delante con la caída de la bolsa de Nueva York en 1929. La euforia de las democracias triunfantes, por otra parte, duraría también muy poco, porque los años veinte

presenciarían también el ascenso de los movimientos totalitarios de uno y otro signo. En 1922 Mussolini protagonizó la marcha sobre Roma que supuso el fin del parlamentarismo y el inicio del fascismo en Italia, un ejemplo que no tardaría en extenderse por Europa y que llegaría a España en forma de dictadura militar en 1923. En 1922 nacería también la URSS.

La crisis del sistema liberal

La Primera Guerra Mundial, a pesar de la neutralidad oficial, también marcó en España un claro punto de inflexión. La sociedad se dividió en dos bandos enfrentados: aliadófilos y germanófilos, pero, sobre todo, la guerra provocó un cambio considerable en la sociedad y en la economía del país. Durante el conflicto, España abasteció a los contendientes y la guerra proporcionó grandes beneficios a la industria y a la élite financiera y empresarial, pero generó paralelamente una subida de los precios, no compensada con los salarios, que empobreció aún más a las clases trabajadoras. El descontento provocó un aumento considerable de la afiliación a las organizaciones sindicales obreras, especialmente a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que acababa de ser legalizada, impulsando la unidad de acción con la Unión General de Trabajadores (UGT). Ambas organizaciones amenazaron con convocar una huelga general si no se paliaba la situación de los sectores sociales menos favorecidos.

La guerra acentuó también otro problema endémico desde hacía tiempo: la situación del Ejército, que arrastraba el problema del excesivo número de oficiales después de años de conflictos coloniales. El presupuesto, destinado a los salarios, no daba para modernizar el equipamiento ni mejorar la formación de sus miembros y las propuestas de reforma encallaban sistemáticamente porque para muchos oficiales de baja graduación, el Ejército era su único medio de vida. La guerra, además, desató la inflación y mermó el poder adquisitivo de la pequeña oficialidad que apenas podía mantenerse con tan ínfimos salarios. Los oficiales descontentos se agruparon en juntas y a lo largo de 1917 la mayoría ya estaban encuadrados en ellas. Reivindicaban mejoras económicas y también que se mantuviera el sistema de ascensos por antigüedad, que se había visto desbordado por los ascensos por méritos de guerra, saltándose el escalafón, de los militares que servían en África.

Otro elemento en discordia fue el nacionalismo. La guerra había enriquecido a las nuevas élites de la periferia que acusaron la dependencia del tradicional centralismo oligárquico de Madrid y reclamaban una mayor autonomía.

La confluencia de estos tres elementos se tradujo en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917 que hizo peligrar la propia pervivencia de la

monarquía de Alfonso XIII y puso en clara evidencia la crisis del sistema de la Restauración. Aunque tuvo un desigual seguimiento y el Ejército se mantuvo fiel al Gobierno, provocó la caída de Eduardo Dato y la sucesión de nuevos gobiernos que en breve tendrían que hacer frente a una nueva huelga que esta vez sí tuvo éxito. En febrero de 1919, la huelga de la Canadiense, la compañía fundada en Toronto que suministraba luz a Barcelona, se convirtió durante 44 días en un suceso de ámbito nacional, provocando la dimisión del conde de Romanones y la formación de un nuevo gabinete con Antonio Maura al frente. Maura perdió las elecciones y en julio de 1919 Joaquín Sánchez Toca formó un gobierno que apenas se mantuvo cuatro meses en el poder. Le sucedió Manuel Allendesalazar y finalmente Eduardo Dato que estuvo al frente del Ejecutivo desde mayo de 1920 hasta que un anarquista lo asesinó el 8 de marzo de 1921.

Para entonces era evidente, además de la crisis política, la pervivencia de una profunda crisis económica que favoreció el aumento de la militancia y de la movilización obrera y que desembocó en su radicalización. Después del fracaso de la huelga de 1917, CNT y UGT no volvieron a unirse, aunque ambas eran partidarias de la ruptura definitiva, si bien mientras la UGT se decantaba por abstenerse de la actividad revolucionaria y apostaba por un pacto con los sectores republicanos y reformistas para sustituir la monarquía por una república democrática, la CNT abogaba por la acción directa, con el consiguiente aumento de la conflictividad social. Los partidos conservadores por su parte tampoco confiaban ya en exceso en las posibilidades del orden liberal-parlamentario y se dejaban arrastrar por los nuevos vientos que soplaban en Europa.

El desastre de Annual

Entre 1917 y 1923 hubo cuatro elecciones, se sucedieron hasta 12 cambios en la presidencia del gobierno y los atentados, las huelgas y los desórdenes públicos estuvieron a la orden del día, especialmente en Cataluña, donde la CNT (que pasó de 100.000 afiliados en 1918 a más de 700.000 a finales de 1919) era más fuerte, pero también en Andalucía, Aragón y Levante, mientras continuaba el descontento de los militares. Los junteros habían conseguido que se continuara con los ascensos por antigüedad, con el consiguiente malestar de los africanistas, que se jugaban la vida en África, y hay coincidencia en subrayar que los intentos reformistas de los gobiernos liberales eran inviables en la práctica o, cuando menos, difícilmente realizables, dada la estructura oligárquica y caciquil que el sistema no había podido superar.

Se ha discutido mucho sobre las razones de la crisis del sistema liberal. Algunos autores piensan que podía haberse logrado una transición paulatina

hacia la democracia que habría evitado el enfrentamiento que condujo a la Guerra Civil, especialmente por los intentos de Maura y Santiago Alba y también del republicanismo reformista liderado por Melquíades Álvarez, pero la mayoría coinciden en afirmar que el sistema estaba agotado en sí mismo y que, en realidad, España no hizo sino sumarse a los aires nuevos que soplaban en la Europa de entreguerras. El éxito del golpe de Primo de Rivera no habría sido, en este sentido, sino la culminación del proceso de descrédito del parlamentarismo en beneficio de los movimientos autoritarios de signo ultraconservador que se estaban dando en muchos países europeos. En España, en cualquier caso, hubo un elemento decisivo, y doloroso, que acabó desencadenando lo inevitable: la tragedia sufrida por el Ejército español en el verano de 1921 conocida como el desastre de Annual.

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, Francia reavivó su política colonial y España, que no quería quedarse atrás, se propuso también completar la ocupación de su zona del protectorado marroquí. El general Silvestre, amigo personal del rey Alfonso XIII, partidario convencido de la aventura colonial, lanzó una arriesgada ofensiva desde Melilla hasta Alhucemas, creyendo que los numerosos puestos defensivos que había establecido a lo largo del frente, los blocaos, podrían resistir. La realidad fue que las cabillas rifeñas unidas bajo el mando de Abdelkrim, que se había convertido en el principal líder de la zona, sembraron el pánico entre las tropas españolas y acabaron poniendo en evidencia la desorganización, la ineficacia y la corrupción del Ejército español. Apenas 4.000 marroquíes se cobraron la vida de más de 10.000 soldados españoles, cuyos cuerpos (entre ellos el del general Silvestre, aunque su cadáver nunca se encontró) quedaron diseminados, malheridos y destrozados en las áridas e inhóspitas arenas de la zona española del protectorado.

La cuestión de Marruecos daría el golpe de gracia al sistema de la Restauración, porque las responsabilidades salpicaron al propio rey. Se creó una comisión para investigar las causas del desastre con el general Picasso al frente, cuyas conclusiones no llegaron a discutirse en las Cortes, suspendidas por las vacaciones de julio de 1923, porque Primo de Rivera dio el golpe de Estado que acabó, en la práctica, con el orden constitucional vigente en España desde 1876.

El golpe de Estado

El golpe se llevó a cabo con inusitada facilidad. Nadie se opuso a él. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, en la madrugada del

13 de septiembre de 1923, lanzó un manifiesto “al país y al Ejército españoles”, lo suficientemente impreciso como para atraer a amplias y diversas capas sociales, aunque con propuestas claramente identificables para conseguirlo, como el propósito de buscar al problema de Marruecos “solución pronta, digna y sensata”, acabar con “la indisciplina social” y condenar a los partidos políticos cuya responsabilidad señalaba. El Manifiesto se presenta, en fin, para salvar a la Patria “por España y por el Rey”, pero como una solución de carácter provisional destinada a mantener el orden público y acabar con la crisis política y colonial. Esa misma noche los soldados bajo su mando incautaron las centrales telegráficas y telefónicas de Barcelona y distribuyeron el bando que declaraba el estado de guerra en las cuatro provincias catalanas. Por la mañana, Primo de Rivera partió hacia Madrid. Había empezado, en palabras de Santos Juliá, la “dictadura con rey”.

Una dictadura que se planteaba, no obstante, como una solución temporal, como una especie de paréntesis que no buscaba sustituir el sistema sino solo apuntalarlo hasta que se lograra su recuperación. Primo de Rivera se hizo con el poder sin encontrar oposición, ni en el Ejército, ni en el rey, ni en las organizaciones obreras y con la indiferencia y pasividad de la mayoría de la población. Un sector del Ejército (dolido por las críticas recibidas tras el desastre de Annual) le apoyó sin reservas, también lo hicieron los sectores políticos más conservadores, especialmente los partidarios de soluciones autoritarias liderados por Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo, y, sobre todo, le apoyó el rey o, cuando menos, no se opuso a que se hiciera con el poder.

Se ha especulado también sobre la inevitabilidad del golpe, aunque hoy parece asentado que era si no inevitable, sí previsible. En medio de una situación internacional precedida por la marcha sobre Roma organizada por Mussolini en octubre de 1922, muchos pensaron que Primo de Rivera era el cirujano de hierro que Joaquín Costa había previsto para superar los males de la patria y el propio Alfonso XIII, durante la visita oficial de finales de noviembre de 1923 programada desde antes del golpe y en la que le acompañó el dictador, le diría a Víctor Manuel III: “Ya tengo mi Mussolini”.

En realidad, Primo de Rivera distaba mucho del perfil del líder fascista. Era un militar simpático, alegre y locuaz, nacido en Jerez y educado en el seno de la aristocracia terrateniente gaditana. Su carrera militar pasó por Cuba, Filipinas y Melilla, ascendiendo en el escalafón por méritos de guerra. Fue capitán general de Valencia, Madrid y Barcelona y cuando murió su tío, el general Fernando Primo de Rivera, heredó el título de marqués de Estella. Campechano y con indudable encanto personal no tenía, sin embargo, dotes para la política ni conocimientos suficientes para afrontar los graves problemas que le esperaban al llegar al poder. Pero el golpe

triunfó sin complicaciones, solo los anarquistas y los comunistas sin demasiado convencimiento ensayaron la oposición, pero chocaron con la indiferencia popular. También Romanones y Melquíades Álvarez, puesto que Primo presentaba su acción como un paréntesis, hicieron notar al monarca que el artículo 32 de la Constitución vigente advertía de que no podían pasar más de tres meses sin que el rey convocase Cortes tras su disolución, pero el monarca firmó en noviembre el Real Decreto que disolvía las comisiones del gobierno anterior y destituía a los presidentes de las dos cámaras. La Dictadura, pues, era un hecho.

Para entender su éxito hay que tener en cuenta, además de la situación interior, favorable a las soluciones de fuerza y al intervencionismo militar que acabaran con la debilidad y dispersión de los partidos políticos, la coyuntura internacional. No solo en Italia se habían impuesto regímenes de carácter totalitario, en Alemania, Hitler se convertiría en el líder del Partido Nacional-socialista Obrero Alemán (NSDAP), es decir, del partido nazi, en 1921, y en Portugal el golpe de 1926, que precedió a lo que luego sería el Estado Novo de Oliveira Salazar, puso fin a la Primera República portuguesa. De hecho, el fin de la guerra mundial había abierto una crisis de los sistemas liberales y parlamentarios en toda Europa en la que el nacimiento del fascismo iba más allá del temor a la expansión del ejemplo ruso y enraizaba en la evidencia de que la sociedad de masas cambiaría por completo el orden social existente antes de 1914.

Se ha discutido también sobre su identificación con el fascismo, aunque en realidad tenía más que ver con otros regímenes dictatoriales existentes en Europa como el del general Metaxas en Grecia, el de Milan Stojadinovic en Yugoslavia, o el de Pilsudski en Polonia y el de Horthy en Hungría. Pero sí intentó, como Mussolini, crear un partido único. Desde el punto de vista interno, la historiografía española ha subrayado que, aunque pueda identificársele con los pronunciamientos al uso a lo largo del siglo XIX, el golpe de Primo fue el único que se propuso la constitución de un régimen militar, sin intención de ceder el poder, una vez tomado, a las autoridades civiles.

En definitiva, la abstención del Ejército, la debilidad del Gobierno, la pasividad de la opinión pública y la actuación del rey que, aunque no le apoyó directamente, tampoco se opuso a él, explican el éxito del golpe y el acceso al poder de Primo de Rivera que, una vez en él, se dispuso a acabar con los graves problemas nacionales pendientes: el caciquismo, los nacionalismos, el orden público y el conflicto marroquí.

2. EL DIRECTORIO MILITAR

Aunque la dictadura nació como una solución provisional, lo cierto es que Primo de Rivera conservaría el poder durante más de seis años, en los que el régimen pasó por varias etapas. En la primera, hasta 1924, se trató de resolver los problemas contra los que había nacido. En la segunda se intentó institucionalizar el régimen, sustituyendo el Directorio militar por un Directorio civil y poniendo en marcha la Asamblea Nacional, una especie de parlamento corporativo cuya primera misión sería intentar dotar al país de una nueva constitución. La última, en fin, presenció la descomposición del régimen que a partir de 1928 se fue quedando sin apoyos hasta su desaparición.

Objetivos y logros

Inmediatamente después del golpe se decretó el estado de guerra que perduró hasta mayo de 1925, se constituyó un Directorio militar formado por ocho generales y un almirante, elegidos directamente por Primo de Rivera que se reservó además el poder ejecutivo. En el directorio estaban representadas todas las regiones militares y todas las armas y cuerpos del Ejército, pero ninguno de sus integrantes tenía experiencia política previa y a partir de entonces se gobernó por decreto. El nuevo presidente se explayó en extensos preámbulos, dando rienda suelta a su optimismo superficial, así como en sus famosas “notas oficiosas” que se ocupaban sin rubor hasta de los aspectos más nimios de la vida nacional.

El objetivo fundamental que justificaba el golpe era la necesidad de regenerar el país y la primera labor que había que acometer era acabar con el caciquismo, considerado el cáncer de la Restauración. Para ello se puso en marcha un extenso programa de depuración, se suspendieron ayuntamientos y diputaciones, se destituyó y persiguió a antiguos funcionarios considerados corruptos, se enviaron delegados gubernativos a los pueblos para inspeccionar la gestión municipal y se ensayó un nuevo modelo de gestión con el Estatuto Municipal de 1924 que pretendía modificar la administración local, acabar con las prácticas caciquiles y sustituir el centralismo administrativo por un régimen de amplia autonomía local. Pero todo fue en vano porque la mayoría de estas medidas ni siquiera llegaron a aplicarse en la práctica. Las redes clientelares persistieron y nada cambió sustancialmente. Nunca se convocaron elecciones municipales, los alcaldes y concejales fueron nombrados aleatoriamente y la administración permaneció centralizada, incluso más de lo que lo estaba antes.

No se ha pasado por alto que ese programa regeneracionista encubría en el fondo un propósito de constituir, como se ha señalado, una verdadera dictadura militar que sustituyera al poder civil y en esa dirección iba encaminado el nombramiento de los delegados gubernativos que eran jefes o capitanes del Ejército. A finales de 1923 había casi 500 distribuidos por todo el territorio nacional, uno por cada partido judicial, con la única misión de controlar directamente la gestión municipal.

El nacionalismo había recibido con esperanza la dictadura, que parecía la mejor solución para poner fin a los conflictos sociales y al pistoleroismo que amenazaba al catalanismo conservador, pero a la hora de la verdad ocurrió exactamente lo contrario. El Estatuto Provincial de 1925, aunque como el Municipal tampoco llegó nunca realmente a aplicarse, era precisamente un instrumento de defensa frente a los movimientos nacionalistas. Predominó la ideología castrense y cualquier manifestación regionalista, incluidas las más inocuas como orfeones o actividades culturales, fue reprimida, mientras la bandera y la lengua catalanas se prohibieron directamente. Los delitos contra la seguridad y la unidad de la patria quedaron bajo jurisdicción castrense y se persiguieron y prohibieron todo tipo de manifestaciones separatistas. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) quedó fuera de la ley y en Cataluña los partidos independentistas como el Estat Català, de Francesc Macià, y Acció Catalana, en el que militaba Nicolau d'Oliver, pasaron a la clandestinidad.

El Somatén

El pistoleroismo, especialmente en Cataluña, había sido una constante en los últimos años de la Restauración y uno de los objetivos fundamentales que pretendía atajar la dictadura. La restauración del orden público se logró con sorprendente rapidez porque se aplicaron fuertes medidas represivas, con los generales Severiano Martínez Anido como ministro de Gobernación y Miguel Arlegui en la Dirección general de Orden Público, pero también porque la CNT atravesaba una profunda crisis interna que casi provocó su disolución. El PCE tuvo que pasar a la clandestinidad.

El somatén era una especie de milicia ciudadana armada, tradicional en Cataluña, que en momentos puntuales colaboraba con las fuerzas de orden y había coadyuvado a luchar contra el pistoleroismo en los años álgidos. La integraban gentes “de orden”, miembros de la alta burguesía y de la aristocracia catalana y en los años de la dictadura se extendió por decreto a toda España, pasando de unos 175.000 encuadrados en 1924 a casi 220.000 en 1928, pero no tuvo el papel fundamental que el dictador le había querido asignar. Aunque

desempeñó labores secundarias de vigilancia y participó en los desfiles, nunca llegó a ser una verdadera fuerza auxiliar verdaderamente útil para la dictadura y después del crecimiento en los años iniciales del régimen acabó prácticamente extinguiéndose con su desaparición. La Segunda República lo disolvió, salvo el somatén rural en Cataluña, y Franco lo restauró. No se abolió oficialmente hasta 1978.

En los años de la dictadura tuvo, sin embargo, otro cariz, porque alistarse en el somatén se convirtió en un medio de ascender políticamente y también en un apoyo importante para las estructuras oligárquicas y caciquiles, sobre todo en el medio rural. En el medio urbano, las clases populares siempre lo vieron como un enemigo más, puesto que estaba integrado esencialmente por miembros de la burguesía: pequeños comerciantes, pequeños propietarios, abogados, ingenieros etc., y se había empleado en la represión de las huelgas. En cualquier caso, no se consiguió el objetivo previsto por Primo de Rivera, que habría querido convertirlo en una organización paramilitar al servicio de la dictadura, al estilo de los camisas negras de Mussolini, y aunque siguió creyendo en él hasta el final, lo cierto es que no pasó de ser, en palabras de Eduardo González Calleja, “un simple adorno coreográfico de los fastos del régimen”. A escala nacional cumplió también otra función, la de mantener las buenas costumbres y la moral tradicional, con un claro componente religioso y siempre al lado de las oligarquías locales.

El desembarco de Alhucemas

Primo de Rivera siempre se había declarado abandonista, consideraba que mantener un territorio inhóspito y hostil no merecía más gasto en hombres y en dinero, sin embargo, el fin de la guerra de Marruecos sería el mayor éxito de la dictadura. Siempre pragmático, el dictador se vio impulsado a intervenir por un cúmulo de circunstancias que tuvo el acierto de saber aprovechar. De acuerdo con su primera idea, cuando llegó al poder ordenó una retirada paulatina, un repliegue que le permitiera repatriar a los más de 100.000 soldados que todavía quedaban en la zona aguantando los continuos ataques de Abdelkrim, que había proclamado la República del Rif.

La táctica pacificadora y negociadora de Primo de Rivera fue interpretada por los rifeños como una muestra de debilidad y los ataques se recrudecieron. Primo, temeroso de que se reprodujera el desastre de Annual, ordenó la retirada de más de 300 puestos en el sector occidental, concentrándose en la línea fortificada costera que se conoció como “línea Primo de Rivera”, es decir, alrededor de las ciudades de Ceuta, Melilla, Tetuán y Larache. La plaza

de Xauen fue abandonada en noviembre de 1924. Las terribles consecuencias de la retirada (que dejó miles de muertos) para el ejército español fueron silenciadas por la censura.

Envalentonado, Abdelkrim, que había extendido su territorio más allá del Rif hasta Gomara y Yebala, creyó que había llegado el momento de la victoria definitiva sobre España. Primo, por su parte, ante la nueva situación consideró la posibilidad de llevar a cabo una gran operación de castigo, el desembarco en Alhucemas, aunque paralelamente continuó con los intentos negociadores llegando a ofrecer al líder rifeño autonomía sobre una gran extensión de terreno e importantes subvenciones españolas. Pero Abdelkrim, que había logrado agrupar un gran número de combatientes en un ejército disciplinado y bien armado, no estaba dispuesto a aceptar nada que no fuera la plena independencia de Marruecos. Malinterpretando la actitud española, que creyó síntoma de debilidad, cometió un grave error: atacar también a los franceses en la primavera de 1925, llegando hasta las cercanías de Fez.

El resultado fue que Francia, por primera vez desde que se constituyó el protectorado conjunto en Marruecos, solicitó el concurso de España para lograr la pacificación definitiva y en el verano de 1925 tuvo lugar la conferencia hispanofrancesa de Madrid en la que se acordó una estrategia común. La colaboración, no obstante, no fue fácil, pero en septiembre de 1925 se llevó a cabo con éxito el desembarco de Alhucemas que algunos autores consideran como un precursor de los desembarcos anfibios aliados durante la Segunda Guerra Mundial. También es necesario reconocerle el mérito al dictador que, lejos de improvisar, planeó una meditada operación con gran número de tropas bien pertrechadas y logró engañar al líder rifeño sobre el lugar en el que se produciría, consiguiendo que 13.000 soldados españoles sorprendieran a los rifeños y les obligaran a claudicar.

Las dificultades, sin embargo, no habían terminado. El mariscal Pétain, al frente de las tropas francesas, estaba convencido de que la única manera de poner fin al problema de Marruecos era avanzar hacia el interior, idea que chocaba con el propósito de Primo de invertir el mínimo número de hombres y de presupuesto en el protectorado. Pero la intransigencia de Abdelkrim, unida a la presión francesa, le obligaron a ceder y la campaña militar conjunta concluyó con éxito en mayo de 1926. Abdelkrim se rindió y fue enviado al destierro, aunque las operaciones militares se prolongaron hasta el verano de 1927, porque era necesario pacificar el territorio, someter a la población y desarmar al enemigo. El éxito aparente no contentó al dictador y Marruecos siguió representando un agujero negro para el erario público español. Había terminado la sangría en vidas humanas, pero continuaba el desgaste económico. A pesar de ello, la pacificación de Marruecos fue, sin duda, el mayor logro de la dictadura.

3. EL DIRECTORIO CIVIL

El éxito del desembarco confirmó a Primo de Rivera en su decisión de permanecer en el poder, dejando atrás el carácter provisional, y le animó a intentar la institucionalización del régimen que, sin renunciar a la dictadura ni al poder de decisión personal, constituyó el 2 de diciembre de 1925 un Directorio Civil, conformado por militares y civiles, pero sin convocar elecciones ni restablecer la Constitución. La idea era rodearse de personas cualificadas y bien relacionadas con el mundo empresarial y agrícola para impulsar el desarrollo económico y la transformación social sin renunciar al intervencionismo estatal.

El nuevo Consejo de Ministros concedió las principales carteras a militares como el general Severiano Martínez Anido que ocupó un puesto clave: la vicepresidencia del gobierno además del ministerio de la Gobernación, o Juan O'Donell que se hizo cargo de la de Guerra, y a figuras procedentes del maurismo como José Calvo Sotelo, joven y brillante abogado, que se puso al frente del ministerio de Hacienda o José Yanguas Messía, que se hizo cargo de la de Estado (Asuntos Exteriores). La cartera de Fomento la ocupó el ingeniero conde de Guadalhorce y la de Trabajo el abogado Eduardo Aunós, antiguo diputado de la Lliga. El Consejo concentró nominalmente todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, puesto que Congreso y Senado seguían disueltos, pero las decisiones políticas no pasaban por el Consejo de Ministros, las tomaba directamente el dictador.

El nuevo directorio no hizo en realidad sino reafirmar las decisiones que ya se habían tomado en 1924. En marzo se había creado el Consejo de Economía Nacional, un organismo corporativo cuya misión era encauzar las aspiraciones de los principales grupos de presión, regular las medidas proteccionistas de la economía y sentar las bases del intervencionismo estatal. Paralelamente, el Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Industria regulaba las relaciones laborales, tratando de frenar mediante los llamados comités paritarios de obreros y patronos, los conflictos sociales. En abril se promulgó el Estatuto Municipal, precedente del provincial que se aprobaría al año siguiente, que dotó a los ayuntamientos de mayor autonomía en materia económica y de gestión.

Pero los dos pilares fundamentales sobre los que iba a descansar el régimen serían el nuevo partido fundado en 1924, la Unión Patriótica, y la Asamblea Nacional Consultiva, que pretendía ser una especie de parlamento, cuyo objetivo fundamental debía ser elaborar un proyecto constitucional.

La Unión Patriótica

La Unión Patriótica fue un partido personalista ligado en exclusiva a la figura del dictador, que intentó relanzarlo como paradigma de partido único capaz de sustituir a todos los demás. Hundía sus raíces en una asociación muy arraigada en Castilla promovida por líderes de catolicismo social que agrupaba a pequeños y medianos propietarios agrarios, la Unión Patriótica Castellana. El nuevo partido, que se nutrió inicialmente de los comités provinciales que surgieron tras el golpe en apoyo de la dictadura, aglutinó también a sectores similares integrados en la Confederación Nacional Católica-Agraria, en Acción Católica y sobre todo en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Pretendió atraer savia nueva de la que deberían salir los nuevos líderes capaces de regenerar el país, alejándolo de las viejas oligarquías y las prácticas caciquiles, pero nada más lejos de la realidad, porque la mayoría de los nuevos afiliados procedían precisamente de esas capas tradicionales y no buscaban una nueva ideología sino continuar cercanos al poder en beneficio propio.

A pesar de la campaña de captación y del incremento notable de afiliación, el partido nunca llegó a ser una organización potente, sino un mero instrumento del poder organizado desde el poder. Un partido personalista que extendía sus tentáculos a través de los gobernadores civiles que nombraban a los alcaldes y concejales, asegurando en la práctica la supervivencia de las redes caciquiles tradicionales. Tampoco tuvo ideología propia ni puede identificarse específicamente con el fascismo, aunque sí adelantó algunos de los elementos que caracterizarían a la extrema derecha en los años siguientes, como el antiliberalismo, el rechazo a la democracia, el militarismo, el anticomunismo y el centralismo, entre otros. Dada la procedencia de sus principales inspiradores, no es extraño que tuviera también ciertas connotaciones integristas, aunque el propio dictador lo definió como “un partido central, monárquico, templado y serenamente democrático”, José María Pemán, uno de sus principales ideólogos como lo sería después del franquismo, afirmó que defendía el Estado tradicional socialcristiano, un claro referente de la identificación Nación-Catolicismo que sostuvo Menéndez Pelayo, enraizada a su vez en el pensamiento tradicionalista de Donoso Cortés o Vázquez de Mella, que más tarde sustentaría también al nacionalcatolicismo.

La Asamblea Nacional Consultiva

El segundo pilar que Primo de Rivera concibió para intentar institucionalizar y asentar el régimen fue la Asamblea Consultiva, cuya misión fundamen-

tal debía ser elaborar una nueva constitución. Aunque suele definirse como una especie de parlamento paralelo, el Real-Decreto que la creó deja claro que “no ha de ser un Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías”, sino un “órgano de información, controversia y asesoramiento de carácter general que colaborará con el Gobierno”. El proyecto no tuvo demasiada buena acogida, pero la Asamblea se reunió por fin a finales de 1927. Estaba integrada por 427 miembros nombrados por el Gobierno, en representación de las administraciones central, provincial y local, de la Unión Patriótica y de las diferentes clases y sectores de la vida nacional: banca, agricultura, comercio, industria, enseñanza, prensa, patronos, sindicatos... Aunque fue el primer intento en la historia del constitucionalismo español de poner en práctica un sistema de representación política corporativa, no tuvo ninguna operatividad. Su función era meramente consultiva y estaba directamente controlada por el Gobierno. Tampoco logró el objetivo fundamental, elaborar un proyecto constitucional. En realidad, su existencia sólo puede comprenderse en el contexto internacional, especialmente europeo, en que se produjo. En medio de la crisis del sistema parlamentario liberal, se estaban ensayando nuevos sistemas de representación corporativa, organicista e intervencionista, cuyo referente más evidente era el modelo del Estado corporativo de Mussolini en Italia.

A pesar de las dificultades, la Asamblea logró redactar un anteproyecto constitucional que no se hizo público hasta julio de 1929, cuando ya el régimen estaba abocado a desaparecer. Un proyecto ambiguo que mezclaba principios tradicionales del liberalismo doctrinario con elementos nuevos del Estado corporativo. La soberanía era compartida por el rey y las Cortes y preveía una sola Cámara compuesta al cincuenta por ciento por representantes de las corporaciones y los designados por sufragio directo. Contemplaba también la unidad indisoluble de la patria y la confesionalidad del Estado y creaba una nueva institución, el Consejo del Reino, con reminiscencias del Antiguo Régimen, dominado por la aristocracia, el clero, el Ejército y los altos funcionarios del Estado, que junto con el rey mantenía la mayoría de las atribuciones en detrimento de la única Cámara. El proyecto, destinado a sustituir a la Constitución liberal de 1876, que continuaba suspendida, no satisfizo a nadie, ni siquiera al dictador, y resultó totalmente inoperante porque Primo de Rivera dimitió poco después.

La cuestión de Tánger

Los intentos de consolidar el régimen alcanzaron también al ámbito internacional, en el contexto geoestratégico tradicional de España y en el ámbito

europeo. La ciudad de Tánger, cuya ubicación geográfica, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo y cercana al estrecho de Gibraltar, la convirtió ancestralmente en pieza codiciada, se regía desde 1923 por un Estatuto firmado por Francia, Gran Bretaña y España (al que se sumarían en 1928 Bélgica, Países Bajos, Portugal, Suecia e Italia) que la convertía en zona internacional y cuyas condiciones nunca convencieron a España que se sentía postergada por Francia. España siempre había reivindicado la incorporación de la ciudad de Tánger al protectorado español y en esta ocasión jugó la baza de la aproximación a Italia que también tenía aspiraciones en la zona. Pero a pesar de las manifestaciones grandilocuentes y de las supuestas presiones conjuntas, la realidad es que Primo era consciente de que no podía abandonar la órbita franco-británica, tradicional en las alianzas internacionales de España.

Mayores consecuencias, de cara al prestigio del régimen en el exterior, tendría la política del dictador en la Sociedad de Naciones, el principal organismo internacional de la época, precedente de la ONU actual, creado al finalizar la Primera Guerra Mundial. El Consejo de la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, estaba integrado por miembros permanentes (las potencias vencedoras: Francia, Reino Unido, Italia y Japón, con la excepción de Estados Unidos porque el Congreso norteamericano se negó a secundar la iniciativa del presidente Wilson que había inspirado con sus 14 puntos la creación del organismo internacional) y cuatro miembros no permanentes, entre ellos España, que debían ser reelegidos y renovados por tercios cada tres años. Esta distinción ocasionó no pocos problemas y sucesivas ampliaciones. Uno de ellos se planteó en 1926 cuando Alemania entró como miembro permanente del Consejo, ocupando el puesto de Estados Unidos, y España decidió reclamar el mismo estatus, amenazando con retirarse de la Sociedad si no lo obtenía. Y no lo obtuvo, viéndose en la incómoda situación de volver a la Sociedad dos años después, con el peso de un gesto desmedido a sus espaldas.

4. ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Las guerras suponen siempre un gran revulsivo y también un gran negocio, para la industria de armas mientras duran y para muchos otros sectores cuando acaban, porque hay que reconstruir todo lo que se ha destruido. Después de los tratados de paz que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial la mayoría de las potencias europeas estaban endeudadas con los Estados Unidos, tenían que pagar los créditos obtenidos para financiar la guerra, mientras la economía crecía a un ritmo no conocido hasta entonces en medio de un clima de

euforia generalizada. Europa necesitaba productos que solo se podían fabricar en Estados Unidos, donde la innovación tecnológica provocó una profunda transformación productiva, pero aun así no pudo hacer frente al exceso de demanda, mientras los obreros, impulsados por la creciente ola consumista provocada por la extensión de la venta a plazos, se endeudaban más a allá de lo aconsejable y muchos empezaron a invertir en bolsa. Al final, el endeudamiento, la inflación y la sobreproducción acabarían provocando en octubre de 1929 la crisis de la bolsa de Nueva York. Tras los años de euforia, comenzaba la Gran Depresión que tendría un impacto mundial.

Coyuntura alcista: los felices 20

Pero a España tardaría un poco más en llegar. La dictadura viviría todavía unos años de bonanza y, a pesar de los últimos contratiempos, de cierta proyección internacional. En mayo de 1929 se inauguraron la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que ensalzaba el hispanoamericanismo cultural y espiritual, y la Exposición Internacional de Barcelona, que llamaba la atención sobre el progreso técnico de la época y que tuvo un gran impacto urbanístico en la ciudad, dejando obras y edificios emblemáticos como el Palacio Nacional o la plaza de España, y en junio la Sociedad de Naciones eligió Madrid para la reunión del Consejo de Seguridad, que coincidirían al final con la crisis de la bolsa neoyorquina que pondría fin a la década dorada de los felices 20. La dictadura se benefició de la coyuntura alcista provocada por el fin de la guerra mundial. España experimentó un crecimiento considerable de la industria, en sectores como el siderúrgico o la construcción, y el régimen supo impulsar la economía favoreciendo las exportaciones, las obras públicas y los proyectos de las grandes empresas con una política de intervencionismo estatal que redundó en el aumento de la prosperidad general. En estos años se acometieron grandes proyectos y se impulsó desde el Estado la política hidráulica y la creación de infraestructuras como la red viaria y ferroviaria. Se construyeron carreteras, canales, puertos, vías férreas y nacieron oligopolios y monopolios como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPESA) o la Compañía Telefónica Nacional de España.

Colaboración con los socialistas

El clima social también se mantuvo relativamente tranquilo. Los sectores más conflictivos, especialmente los anarquistas, habían sido duramente

reprimidos y condenados, como los comunistas, a la clandestinidad y los socialistas fueron capaces de adaptarse para sobrevivir. En realidad, el dictador se benefició de la actitud realista y pragmática del PSOE. Su líder, Pablo Iglesias, que fallecería en diciembre de 1925, siempre había sostenido que la revolución llegaría por sí misma, tras el agotamiento del sistema capitalista. Era una idea que entonces también sustentaban Francisco Largo Caballero o Andrés Saborit. Conscientes de que no podían oponerse con posibilidades de éxito a la dictadura, prefirieron colaborar con ella y esperar mejor ocasión. La ocasión llegaría en 1931, cuando quedó en evidencia que el PSOE era el único partido en condiciones de pactar con las fuerzas republicanas para obtener el poder.

Por el momento, los socialistas estuvieron presentes en instituciones oficiales como el Consejo de Trabajo, nuevo organismo creado para asumir las funciones del antiguo Instituto de Reformas Sociales, y en el Consejo de Estado, órgano meramente consultivo, pero de relevancia, para el que se eligió a Largo Caballero como representante del PSOE. Otros líderes socialistas, que desempeñarían carteras relevantes durante la República, como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, prefirieron dimitir de la ejecutiva del partido, en señal de protesta.

Política social: los comités paritarios

La buena sintonía fue posible porque la dictadura también impulsó una política social que mejoró las condiciones de vida de los obreros: casas baratas, servicios sanitarios, y medidas laborales como reducción de jornada o descanso dominical, promulgó el nuevo Código del Trabajo y consolidó la organización corporativa.

El Código del Trabajo, que regulaba los contratos agrícolas e industriales, se promulgó en agosto de 1926 y en noviembre se creó la Organización Nacional Corporativa. Pero la mayor novedad fue la creación de los comités paritarios o comités mixtos, compuestos por obreros y patronos, para dirimir los conflictos laborales por la vía de la negociación. El modelo estaba inspirado en el italiano, aunque con diferencias esenciales y nunca convenció a los patronos. Sin embargo, los socialistas lo apoyaron con convicción. La UGT tuvo una eficaz participación en ellos, logrando mejoras laborales para los obreros y afianzando con ello su implantación, que se extendería al sector agrícola con la creación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT).

5. OPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN

Aunque Primo de Rivera intentó consolidar el régimen, garantizar el orden público, afianzar la estabilidad social y neutralizar la política colonial, no logró convencer a todos y la oposición nunca cesó. De hecho, en los pocos años que duró la dictadura tuvo que hacer frente a insurrecciones anarquistas, nacionalistas y militares y a la oposición directa de los estudiantes, de los intelectuales y de los republicanos que, a la postre, acabarían con ella, arrastrando en su caída al propio rey.

Los primeros que se enemistaron con él fueron los políticos dinásticos, que acabaron distanciándose de Alfonso XIII por su apoyo al dictador. Ya hemos mencionado la reacción del rey cuando Melquíades Álvarez, presidente del Congreso, y el conde de Romanones, presidente del Senado, le hicieron notar a los dos meses del golpe su obligación de convocar las Cortes, que no fue otra que firmar el decreto de disolución y la destitución de ambos. Este desapego, no exento de indiferencia, le costaría caro porque los políticos dinásticos nunca lo olvidaron, como no lo haría Santiago Alba, especialmente perseguido por la dictadura como representante señero de todos los males de la vieja política, que se exilió en Francia. Todos se sintieron traicionados por el monarca que quedó indisolublemente unido a la suerte de la dictadura y acabaron buscando apoyo en sectores del Ejército que se habían sentido igualmente menospreciados. La caída de la monarquía fue perfilándose como la única salida y a ello contribuirían también nacionalistas, anarquistas e intelectuales que acabaron facilitando el ascenso de la solución republicana.

Anarquistas, nacionalistas y militares

Más contundentes fueron los anarquistas, que habían sido fuertemente reprimidos por la dictadura. En noviembre de 1924 un grupo armado, supuestamente integrado por anarquistas y separatistas catalanes, cruzó la frontera francesa con la intención de derrocarla. El enfrentamiento se produjo en Vera del Bidasoa (Navarra). Hubo un tiroteo entre varios centenares de militantes armados y la Guardia Civil que causó varias bajas. Se culpó de la intentona, sin demasiada coherencia, a Miguel de Unamuno, que había sido muy crítico desde el principio con el dictador, y que se hallaba a la sazón desterrado en Fuerteventura, después de haber sido cesado en su cátedra y destituido como vicerrector de la Universidad de Salamanca. También se culpó de haberla inspirado al novelista republicano Vicente Blasco Ibáñez, al filósofo José Ortega y Gasset y al periodista Rodrigo Soriano, que había criticado muy duramente

al dictador en el Ateneo de Madrid. Todos ellos se habían ido distanciando progresivamente del régimen, al mismo ritmo que veían diluirse sus primeras intenciones regeneracionistas y comprobaban que había acabado degenerando en una dictadura militar.

Dos años después, en noviembre de 1926, el partido creado por Francesc Macià en julio de 1922, Estat Català, concebido como un órgano de combate desde la base de que con una monarquía no sería posible conseguir el autogobierno en Cataluña, organizó una invasión del territorio catalán por Prats de Molló (Rosellón), que tampoco tuvo éxito, en parte por la propia ingenuidad de la estrategia que partía de la invasión para desencadenar la huelga general y la sublevación final de todo el pueblo.

Ambos intentos solo sirvieron para que la dictadura fortaleciera la represión y para que los grupos más radicales se reorganizaran y reforzaran. En julio de 1927 se fundó en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI), dispuesta a convertirse en la vanguardia de la revolución.

A pesar de que los militares ocuparon puestos importantes en la dictadura y de que Primo de Rivera desde el primer momento arbitró medidas a su favor, no pudo evitar que el descontento se extendiera también en el seno del Ejército. A ello contribuyó, sin duda, su política de nombramientos que obligó a que militares de superior rango tuvieran que acatar las órdenes de otros de rango inferior que ostentaban un cargo político. Esto atentaba directamente contra la esencia de la mentalidad militar y colocó a muchos miembros del Ejército en la oposición al dictador. Este resentimiento fue aprovechado, por otra parte, por los políticos menospreciados por el monarca que acudieron a ellos en busca de apoyo. Lo obtuvieron del capitán general Weyler y del teniente general Aguilera que acaudillaron la asonada del 24 de junio de 1926, conocida como “la Sanjuanada” porque tuvo lugar la noche de San Juan. Los militares se pronunciaron para volver al orden constitucional, pero fueron fácilmente reprimidos en poco más de dos días y no excesivamente castigados.

Mayores repercusiones tendrá el conflicto con el cuerpo de Artillería que estalló en septiembre de 1926. Los desajustes del Ejército, como consecuencia de la guerra de Marruecos y en especial el desmesurado número de oficiales, seguían poniendo en evidencia la necesidad de reformarlo en profundidad. Primo lo intentó, pero no supo acertar, limitándose a adoptar medidas superficiales que no llegaban a la raíz del problema. Una de ellas fue la de intentar suprimir los ascensos por antigüedad, que provocó la airada respuesta de los artilleros que se encerraron en los cuarteles. Primo era partidario de las escalas abiertas, mientras los artilleros defendían la llamada escala cerrada, es decir, se negaban a admitir ascensos por méritos de guerra, prefiriendo que estos se premiaran con una condecoración. Primo les impuso su criterio en el verano

de 1926 con un decreto de efectos retroactivos desde 1920, que los artilleros rechazaron. El dictador reaccionó con dureza, suprimiendo el cuerpo sin más, y aunque luego se retractó, el mal ya estaba hecho. El descontento del Ejército, las diferencias entre los africanistas y peninsulares y los desequilibrios provocados por la larga guerra de África continuaron alimentando el malestar en su seno. Un malestar que más adelante estallaría contra las reformas de Manuel Azaña desde el Ministerio de la Guerra en los años de la República y a la postre en julio de 1936.

Republicanos e intelectuales

También en 1926 nació la Alianza Republicana que aglutinó a todas las fuerzas dispuestas a impulsar el cambio en la forma de gobierno, a la vista del agotamiento de la anterior. Los radicales de Alejandro Lerroux, los republicanos catalanes de Marcelino Domingo y los reformistas de Acción Republicana, en la que se encuadraban intelectuales como Manuel Azaña, Luis Araquistáin o Ramón Pérez de Ayala, confluyeron en la necesidad de acabar con la dictadura y volver al régimen parlamentario y constitucional. Una línea que también secundaban viejos líderes conservadores, especialmente cuando comprobaron que el proyecto constitucional que intentó la Asamblea Nacional Consultiva no salió adelante. Uno de ellos, José Sánchez Guerra, jefe del Partido Conservador, dos veces presidente del Consejo de Ministros con Alfonso XIII y exiliado voluntariamente en París desde el comienzo de la dictadura, organizó desde allí la llamada plataforma constitucionalista que aglutinó a todos los descontentos: reformistas, liberales y republicanos dispuestos a derrocar la dictadura. En enero de 1929 Sánchez Guerra llegó a Valencia para ponerse al frente de la insurrección, pero los artilleros se le adelantaron en Ciudad Real y el movimiento quedó invalidado. Sánchez Guerra será juzgado y absuelto pero el propósito de volver a la legalidad constitucional no caerá ya en saco roto.

La universidad y el mundo de la cultura tampoco quedaron al margen de la oposición. El auge económico especialmente en las ciudades había hecho aumentar el número de estudiantes procedentes de las clases medias urbanas adineradas. El de estudiantes universitarios se había triplicado en pocos años y a finales de 1926 se había creado en la Universidad Central de Madrid la Federación Universitaria Escolar (FUE), para contrarrestar la influencia de la Asociación de Estudiantes Católicos y para protestar contra la política de la dictadura. Después de algunos incidentes previos, la revuelta estudiantil estalló en 1928 provocada por el expediente abierto al catedrático Luis Jiménez

de Asúa y sobre todo por la llamada Ley Callejo promulgada en mayo, cuyo artículo 53 equiparaba los títulos públicos con los expedidos por los centros católicos existentes: la Universidad María Cristina de El Escorial de los agustinos y la de los jesuitas de Deusto. Las protestas se acrecentaron y extendieron en 1929 logrando la derogación del polémico artículo 53, pero la agitación estudiantil persistió hasta la propia caída del dictador.

La dictadura nunca fue bien vista en los medios culturales, aunque inicialmente solo se levantaron decididamente contra ella voces como la de Miguel de Unamuno o Rodrigo Soriano, ambos deportados en 1924 a la isla de Fuerteventura, o la del escritor de mayor prestigio internacional de la época, Vicente Blasco Ibáñez, cuya novela *Los cuatro jinetes del Apocalipsis*, con el trasfondo de la Primera Guerra Mundial, fue el libro más vendido en Estados Unidos en 1919 y acabaría siendo llevada al cine dos años después. Todos ellos eran republicanos, pero la proyección internacional de Blasco Ibáñez trascendió y el dictador presentó en Francia una querrela contra él por injurias contra el rey, que tuvo finalmente que retirar. Los intelectuales de la generación de 1914, los escritores Manuel Azaña y Ramón Pérez de Ayala o el catedrático Luis Jiménez de Asúa, que sería también deportado a las islas Chafarinas, se mostraron también críticos con el régimen, así como los socialistas que acabaron abandonándole, negándose a participar en la Asamblea Nacional de 1927. Incluso lo harían los sectores sociales que habían apoyado el golpe de Estado en 1923. La opción dictatorial, el cirujano de hierro pretendido por Joaquín Costa, no había sido capaz tampoco de atajar los males del régimen de la Restauración.

La caída del dictador

Cuando se hizo público por fin, en 1929, el proyecto constitucional que había elaborado la Asamblea Nacional, nadie lo dio por bueno. El ensayo de sustituir el régimen de la Restauración por uno nuevo sin las rémoras del anterior se consideró fracasado y el propio dictador, cansado y enfermo, así lo entendió también y presentó su dimisión el 28 de enero de 1930. Un rasgo inédito tratándose de un dictador. Nadie le detuvo ni nadie salió en su defensa. Primo de Rivera marchó al exilio con la misma indiferencia general que le acompañó cuando lanzó su bando de sublevación, pero entonces se abría una nueva etapa, ahora se cerró. El dictador murió en París apenas tres meses después, el 16 de marzo de 1930.

Hoy hay bastante consenso sobre las características específicas de la dictadura de Primo de Rivera que bien puede considerarse una experiencia a caballo entre los tradicionales pronunciamientos que habían jalonado la historia

de España a lo largo del siglo XIX y los nuevos modelos totalitarios que tanta repercusión tendrían en la Europa de entreguerras. No obstante, los principales autores que lo han estudiado aportan matices que conviene considerar.

Aunque es inevitable especular sobre sus posibles similitudes con el fascismo, lo cierto es que ni el Somatén puede equipararse con los camisas negras de Mussolini ni la Unión Patriótica llegó a ser un partido fuerte. Es cierto que algunos elementos del Estado corporativo inspiraron las medidas que tomó el dictador cuando creyó llegado el momento de pasar del paréntesis a la estabilidad, pero a la hora de la verdad los pilares del régimen de la Restauración, las oligarquías tradicionales y el caciquismo rural, aunque se encuadraron en las nuevas instituciones, siguieron actuando como siempre lo habían hecho. Tampoco Primo estuvo muy acertado con sus decisiones sobre el Ejército. Y tampoco fue demasiado coherente consigo mismo. Siendo partidario del abandono, tuvo que afrontar el final de la guerra de Marruecos y a pesar de que acabó con la sangría de vidas humanas no logró deshacerse de la carga económica que suponía el protectorado. Tampoco logró mejorar para España las condiciones estatutarias del régimen de Tánger. Y su decisión de mantener las escalas abiertas en el Ejército, aunque luego se retractara, le enemistó con el cuerpo de artilleros.

Por otra parte, el régimen de Primo de Rivera no fue una excepción. Ya hemos señalado que se produjeron experiencias similares en países de la Europa oriental y meridional, como Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría o Yugoslavia, así como Grecia y Portugal, sin embargo, en ninguno de ellos la dictadura llegó tras un golpe de Estado. En realidad, estos cambios no son sino el reflejo del cambio que se había producido y que se estaba produciendo en la Europa de entreguerras. Las viejas fórmulas se habían agotado y era necesario buscar unas nuevas. Ortega y Gasset empezó a publicar en 1927 en el diario *El Sol* lo que sería su libro más emblemático: *La rebelión de las masas*, que hacía hincapié en esa transformación y que, aunque no se decantaba ni por el fascismo ni por la experiencia soviética, reflejaba bien el cambio en las estructuras de poder que inevitablemente se estaba produciendo. Los regímenes autoritarios de corte dictatorial fueron una salida a la incapacidad de los sistemas políticos tradicionales o a la falta de voluntad de las élites para dar salida a las necesidades de la nueva sociedad emergente que reclamaba una ampliación de las libertades y de la representación popular. En España también se produjo ese cambio, incentivado por el desarrollo que trajo la Primera Guerra Mundial a un país que había permanecido neutral, aumentando los ingresos de la industria y la emigración paralela del campo a la ciudad, con el consiguiente incremento de la conciencia obrera y de la demanda de cultura y servicios públicos.

En Italia, y más adelante en Alemania, esta demanda se canalizaría a través del fascismo. Ambos países habían pasado por experiencias previas de gobiernos democráticos que habían defraudado las respectivas expectativas nacionales. El fascismo representó para las clases medias, para la burguesía y para los obreros una esperanza de reconstrucción nacional, de afirmación internacional y de mejora de las condiciones de vida, aunque luego degenerase de la forma en que lo hizo. Ambos países tuvieron un líder carismático que logró arrastrar al pueblo, un partido de masas y un modelo moderno de Estado en el horizonte, aunque luego desembocase en una guerra mundial. No fue así en España, ni Primo de Rivera era un líder carismático, sino un general locuaz, alegre y campechano, ni la Unión Patriótica fue un partido de masas, ni había un modelo de Estado verdaderamente nuevo capaz de dar respuesta a las aspiraciones de la nueva sociedad, sino las mismas élites dirigentes, encuadradas ahora en organismos de nueva creación, pero poco dispuestas a llevar adelante las reformas sociales y estructurales que necesitaba el país.

Con estas tesis tradicionales de Shlomo Ben Ami o Gómez Navarro, conviven otras interpretaciones que añaden diferentes matices. Para Manuel Tuñón de Lara, la dictadura fue una reacción del bloque de poder para solucionar la crisis de la hegemonía del Estado; para Carlos Seco Serrano, Javier Tusell y Raymond Carr una solución transitoria, un paréntesis, en la crisis del sistema parlamentario de la Restauración. Todas son ciertas, pero no excluyen la más contundente de María Teresa González Calbet, para quien la dictadura no fue sino la prueba evidente del fracaso definitivo de los partidos dinásticos y, a la larga, de la propia Monarquía, y la más reciente de Eduardo González Calleja que la considera, más allá de un mero paréntesis, un verdadero intento de consolidar en España una dictadura militar.

BIBLIOGRAFÍA

- Alía Miranda, Francisco (2023). *La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Paradojas y contradicciones del nuevo régimen*. Madrid, Catarata.
- Álvarez Rey, Leandro (2006). *Bajo el fuero militar. La dictadura de Primo de Rivera en sus documentos (1923-1930)*. Sevilla, Universidad de Sevilla.
- Barrio, Ángeles (2004). *La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad*. Madrid, Síntesis.
- Ben Ami, Shlomo (1983). *La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930*. Barcelona, Planeta.

- Gómez Navarro, José Luis (1991). *El régimen de Primo de Rivera. Reyes, Dictaduras y dictadores*. Madrid, Cátedra.
- González Calbet, María Teresa (1987). *La dictadura de primo de Rivera. El Directorio Militar*. Madrid, El Arquero.
- González Calleja, Eduardo (2005). *La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930*. Madrid, Alianza Editorial.
- Juliá, Santos, (1999). *Un siglo de España. Política y sociedad*. Madrid, Marcial Pons.
- Martínez Segarra, Rosa María (1984). *El Somatén Nacional en la dictadura del general Primo de Rivera*. Madrid, UCM.
- Moreno Luzón, Javier (2009). *Restauración y Dictadura*. Vol. 7 de la Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Barcelona-Madrid, Crítica-Marcial Pons.
- Moreno Luzón, Javier (2023). *El rey patriota. Alfonso XIII y la nación*. Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- Núñez Seixas, José Manuel (2018). *Suspiros de España. El nacionalismo español, 1808-2018*. Barcelona, Crítica.
- Seco Serrano, Carlos (2002). *La España de Alfonso XIII. El Estado, la política, los movimientos sociales*. Madrid, Espasa Calpe.
- Suárez Cortina, Manuel (ed.) (1997). *La Restauración entre el liberalismo y la democracia*. Madrid, Alianza.
- Sueiro Seoane, Susana (1993). *España en el Mediterráneo: Primo de Rivera y la "cuestión marroquí", 1923-1930*. Madrid, UNED.
- Tuñón De Lara, Manuel (1992). *Poder y sociedad en España, 1900-1931*. Madrid, Espasa-Calpe.
- Tusell, Javier y García Queipo de Llano, Genoveva (2001). *Alfonso XIII. El rey polémico*. Madrid, Taurus.

